



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -

Expediente: 11001 33 35 010 2018 00154 00

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022).

Referencia:

Expediente: 11001 33 35 010 **2018 00154** 00.

Ejecutante Telesforo García Sierra.

Ejecutado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Clase: Proceso ejecutivo.

El Despacho procede a pronunciarse sobre el recurso de reposición, y en subsidio, el de apelación, que interpuso la ejecutada contra el auto de 11 de agosto de 2021, por medio del cual se ordenó librar mandamiento de pago.

Para decidir se **CONSIDERA**

El artículo 438¹ del CGP señala, que el recurso de reposición procede contra el auto que libra mandamiento de pago. El siguiente artículo 442 (Inc. 3²), precisa que el recurso horizontal sólo procede para proponer excepciones previas. Por manera que el estudio del recurso de reposición, objeto de la presente providencia, se restringirá a aquellos argumentos que apunta a sustentar alguna excepción con el carácter de previa.

En este caso, la entidad ejecutada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, propone excepciones previas y de fondo con el recurso de reposición. Se estiman como previas las de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva. De fondo, se plantearon las excepciones de pago e inoperancia de intereses. Dado que el recurso de reposición sólo se puede utilizar para formular excepciones previas, no se abordarán en esta oportunidad las citadas excepciones de fondo. De manera que, la providencia se restringirá a pronunciarse sobre las excepciones previas.

¹ ARTÍCULO 438. RECURSOS CONTRA EL MANDAMIENTO EJECUTIVO. El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados.

² ARTICULO 442 La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:
(...)

3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -

Expediente: 11001 33 35 010 2018 00154 00

1. De la caducidad. Esta excepción se fundamenta en que ha expirado el plazo para ejercer la acción ejecutiva. Para el efecto, señala que entre la ejecutoria del título – 4 de marzo de 2010 – y la radicación de la demanda – 25 de abril de 2018 – transcurrieron ocho (8) años, un mes y veintidós (22) días. En su criterio, ello supera el plazo previsto en el artículo 164 (Lit. k³) del CPACA, en armonía con el artículo 2536⁴ del C.C.

Sin embargo, la ejecutada aclara que contabiliza el término de la caducidad bajo el entendido que no se interrumpió durante el proceso de liquidación de CAJANAL. Argumenta que la Ley 550 de 1999 sólo aplica para los procesos de liquidación de las entidades del orden territorial, que no para las del orden territorial. Con ello, quiso decir que no se debía aplicar la jurisprudencia del Consejo de Estado que estima interrumpida el término de caducidad de la acción, en virtud de la Ley 550 de 1999.

El Despacho observa que las cuentas del recurrente desconocen la jurisprudencia del Consejo de Estado⁵, según la cual la liquidación de CAJANAL interrumpió el término de caducidad. El Juzgado aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado, en atención a lo dispuesto mediante los artículos 10 y 102 del CPACA. El criterio decantado de la máxima autoridad de esta Jurisdicción, se contrae a que la interrupción operó entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013.

Siendo así, en este caso, con la ejecutoria de la sentencia no se podía comenzar a contabilizar el término de caducidad, pues aconteció el 4 de marzo de 2010 cuando se encontraba interrumpido el término de caducidad. La contabilización se debe realizar a partir del día siguiente a la terminación de la liquidación de CAJANAL E.I.C.E., esto es, a partir del 12 de junio de 2013. Al empezar desde esta fecha, y llegar al momento de presentación de la demanda - 25 de abril de 2018 –no alcanza a sumar cinco (5) años.

³ “k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida;”

⁴ ARTICULO 2536. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTIVA Y ORDINARIA. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).

Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término.

⁵ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección “B”, Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de tutela de 7 de febrero de 2019. Rad. 25000-23-42-000-2014-01475-01(3531-17). Actor: Gladys del Carmen y Melba Sofía Jiménez García. Demandado: UGPP.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -

Expediente: 11001 33 35 010 2018 00154 00

La ejecutante disponía de seis (6) años y seis (6) meses para ejercer la acción ejecutiva, según las normas que regulan la caducidad. En efecto, el artículo 136 del CCA dispone que la acción ejecutiva *“caducara al cabo de los cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho”*. A ello se suma, que el siguiente artículo 177 del CCA, preceptúa que las sentencias serán ejecutables *“dieciocho (18) meses después de la ejecutoria”*. Como la ejecutante acudió en un tiempo inferior a cinco (5) años, es válido concluir que la presente acción se encuentra vigente. Ello equivale a decir que no prospera el recurso de reposición por razón de la caducidad.

2. De la legitimación en la causa por pasiva. Esta excepción se fundamenta en que se carece de competencia para asumir el pago de la condena, en aquellos casos en que el título quedo ejecutoriado antes del 20 de abril de 2010, y no se presentó la reclamación dentro del proceso de liquidación de CAJANAL, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto 2196 de 2009 y el artículo 23 del Decreto 254 de 2000, modificado por el artículo 12 de la Ley 1105 de 2006. En tal virtud, considera que el ejecutante no puede suplir la falta de diligencia con el presente proceso ejecutivo.

Al respecto, será suficiente con decir que la UGPP sustituyó a CAJANAL en sus obligaciones. En efecto, con la extinción de CAJANAL, a partir del 12 de junio de 2013, la UGPP se subrogó en su condición de sucesor de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen pensional de la extinta CAJANAL. Ello implicaba cumplir a cabalidad con las sentencias judiciales en materia pensional, como las que son el objeto del proceso, y por consiguiente, la legitimación en la causa por activa recae en la entidad sucesora. Por tanto, tampoco prospera el recurso por este motivo.

El recurso subsidiario de apelación no se concederá porque expresamente el artículo 238 del CGP preceptuó que *“El mandamiento de pago no es apelable”*.

Por otra parte, se observa que la UGPP otorgó poder por escritura pública a VITERI ABOGADOS SAS Nit 900.569.499-9, representada legalmente por el abogado Omar Andrés Viteri Duarte, quien a su vez sustituyó el poder. El Despacho procederá a realizar los respectivos reconocimientos de personería para actuar en el proceso.

Por lo expuesto, se **RESUELVE:**



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -

Expediente: 11001 33 35 010 2018 00154 00

Primero. NO REPONER el auto de 11 de agosto de 2021, por medio del cual se ordenó librar mandamiento, por las razones antes expuestas.

Segundo. NO CONCEDER por improcedente, el recurso subsidiario de apelación interpuesto contra el auto de 11 de agosto de 2021, conforme a lo aquí expuesto.

Tercero. RECONOCER a los abogados Omar Andrés Viteri Duarte y Laura Natali Feo Peláez, como apoderados principal y sustituto de la UGPP, respectivamente, conforme a los documentos anexados al expediente.

Notifíquese y cúmplase


JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

gpg